



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones
(29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

Nº 37/2011 (República Árabe Siria)

Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de febrero de 2011

Relativa a: Abdul Rahman

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Abdul Rahman es un ciudadano sirio de origen kurdo. Es escritor, defensor de los derechos humanos y miembro de la organización de derechos humanos siria MAF.

4. Según se ha informado, el 2 de marzo de 2010 el Sr. Rahman fue detenido en su casa por agentes de los servicios de inteligencia militar. En el momento de su detención, el Sr. Rahman se encontraba con su familia y una colega y defensora de MAF, Nadera Abdou. La Sra. Abdou también fue detenida por los agentes militares. Conforme a la información recibida, los agentes no mostraron órdenes de detención respecto de ninguno de los dos casos y, pese a la falta igualmente de una orden de registro, procedieron a inspeccionar el domicilio y confiscaron libros, un ordenador y distintas declaraciones no publicadas de MAF.

5. La información recibida indica que el Sr. Rahman y la Sra. Abdou fueron conducidos a la sede de los servicios de inteligencia militar en Aleppo. La Sra. Abdou fue puesta en libertad el 6 de marzo de 2010, pero el Sr. Rahman permaneció detenido. Si bien su familia adoptó todas las medidas disponibles para obtener información sobre su suerte y su paradero, las autoridades, al parecer, no reconocieron su detención. El Sr. Rahman estuvo detenido en régimen de incomunicación antes de comparecer ante la jurisdicción militar el 8 de mayo de 2010, y se le privó de asistencia jurídica. Supuestamente se le acusó de pertenecer a una organización separatista kurda prohibida. Según la información recibida, el juez instructor de Aleppo tenía que celebrar una vista en relación con el caso del Sr. Rahman el 16 de junio de 2010.

6. La fuente alega que la detención y la privación de libertad del Sr. Rahman son consecuencia directa de su ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Respuesta del Gobierno

7. El Grupo de Trabajo remitió la comunicación al Gobierno el 4 de febrero y el 10 de junio de 2011, y lamenta que este no haya facilitado la información solicitada. El Grupo de Trabajo habría recibido con satisfacción la cooperación del Gobierno.

Deliberaciones

8. De conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso a partir de la información recibida.

9. En el presente caso, la primera cuestión a dilucidar es si la privación de libertad es consecuencia del ejercicio de los derechos y libertades consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. El Grupo de Trabajo ha examinado la relación entre la detención del Sr. Rahman y su ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. La fuente alega que la detención es consecuencia directa de las actividades que ejerce en relación con la labor de MAF y que no existen otros motivos. El Grupo de Trabajo no ha recibido ninguna información del Gobierno que refute la denuncia de que se han vulnerado las garantías de derechos humanos consagradas en la libertad de opinión y de expresión.

11. Puesto que el Gobierno no ha rebatido los cargos suficientes formulados por la fuente, el Grupo de Trabajo no tiene más alternativa que llegar a la conclusión de que la detención del Sr. Rahman es realmente una restricción injustificada de su ejercicio al derecho fundamental de la libertad de opinión y de expresión. Así pues, la detención del Sr. Rahman corresponde a la categoría II aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Además, el Sr. Rahman no fue llevado ante un juez, con arreglo a las obligaciones internacionales de derechos humanos, y se vio privado de asistencia jurídica. El Grupo de Trabajo reitera que la jurisdicción militar y de excepción del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, contra la que no cabe recurso, no satisface los requisitos de un proceso con las debidas garantías.

13. La jurisprudencia constante del Grupo de Trabajo es que el uso de tribunales militares en casos como el presente incumple las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos (véase, por ejemplo, la opinión N° 27/2008). En sus observaciones finales sobre la República Árabe Siria, el Comité de Derechos Humanos dijo que "sigue preocupado por las numerosas denuncias de que en los procesos que sustancian esos tribunales [militares] no se respetan las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto" (CCPR/CO/71/SYR, párr. 17). En sus observaciones finales sobre el informe inicial de Siria, el Comité contra la Tortura "expresa su profunda preocupación por las numerosas, concordantes y graves alegaciones según las cuales ese Tribunal no funciona de conformidad con las normas judiciales internacionales" (CAT/C/SYR/CO/1, párr. 11). El Comité añadió que el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado "tiene la facultad de establecer penas e imponer sanciones penales por delitos que están definidos en términos muy amplios..." (*ibid.*). Por último, en su Observación general N° 32 (2007) relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, el Comité de Derechos Humanos reafirmó que las garantías establecidas en el artículo 14 se aplicaban a las jurisdicciones ordinarias y especializadas, ya fueran de carácter civil o militar (CCPR/C/GC/32, párr. 22).

14. El Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho del Sr. Rahman a un juicio justo, consagrado en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisten tal gravedad que confieren a su detención un carácter arbitrario. Por lo tanto, la detención del Sr. Rahman también corresponde a la categoría III aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. Además, el Grupo de Trabajo señala que la presente es solo una de las distintas opiniones en las que ha concluido que la República Árabe Siria ha incumplido sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos (véanse, por ejemplo, las opiniones N° 1/2011 y N° 26/2011). El Grupo de Trabajo recuerda a la República Árabe Siria su deber de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de no detener de manera arbitraria, poner en libertad a las personas que hayan sido objeto de detención arbitraria y otorgarles una indemnización. La obligación de cumplir las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos corresponde no solo al Gobierno sino también a todos los funcionarios, incluidos los jueces, los agentes de policía y de seguridad, y los funcionarios de prisiones con responsabilidades pertinentes. Nadie puede contribuir a que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, el Grupo de Trabajo

subraya la responsabilidad que puede derivarse de la detención arbitraria cuando constituye un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional consuetudinario.

Decisión

16. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Rahman es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Árabe Siria que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, lo que incluye poner en libertad inmediatamente al Sr. Rahman y otorgarle una indemnización adecuada.

[Aprobada el 1º de septiembre de 2011.]
